



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE: 2124/2024  
TERCERA SALA UNITARIA

ACTOR: RAFAEL DE LA CRUZ BUENROSTRO.

DEMANDADO: SECRETARÍA DE LA HACIENDA  
PÚBLICA Y/O SERVICIO ESTATAL  
TRIBUTARIO.

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

SECRETARIA: NOHEMI TORRES SAAVEDRA

Guadalajara, Jalisco, 28 veintiocho de junio de 2024 dos mil veinticuatro.

**V I S T O S** para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por **RAFAEL DE LA CRUZ BUENROSTRO**, en contra de la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y/O SERVICIO ESTATAL TRIBUTARIO**, y;

#### R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 21 veintiuno de marzo de 2024 dos mil veinticuatro, a través de la oficialía de partes común de este Tribunal, suscrito por **RAFAEL DE LA CRUZ BUENROSTRO**, por su propio derecho promovió juicio en Materia Administrativa, por los motivos y consideraciones que del mismo se desprenden.

2. Por auto de 2 dos de abril de 2024 dos mil veinticuatro, se admitió la demanda, teniéndose como autoridad demandada a la descrita en el proemio de la presente resolución; y como actos administrativos impugnados; los derechos de refrendo anual de placas vehiculares para los ejercicios fiscales 2015, dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis, 2017 dos mil diecisiete, 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve, 2020 dos mil veinte, 2021 dos mil veintiuno, 2022 dos mil veintidós y 2023 dos mil veintitrés, así como los recargos, actualizaciones y gastos de ejecución.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las documentales, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió; con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para

Página 1 de 14



que dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda.

También se requirió a las autoridades demandadas, para que al momento de producir contestación a la demanda, exhibiera copias certificadas de los actos administrativos impugnados, apercibidas que en caso de no hacerlo así, se les aplicaría cualquiera de las medidas de apremio de las previstas en el artículo 10, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tener por ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esos documentos.

3. Con fecha 20 veinte de junio de 2024 dos mil veinticuatro, se tuvo a las autoridades demandadas, produciendo contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y defensas que de su escrito se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas a que en derecho hubo lugar, mismas que se tuvieron por desahogadas, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió; con las copias simples del escrito de contestación de demanda, se ordenó correr traslado a la parte actora para que quedara debidamente enterada de su contenido.

Asimismo, se dio cuenta que las autoridades demandadas, fueron omisas en remitir copias certificadas de los actos administrativos requeridos, **teniendo como ciertas las afirmaciones que la parte actora pretende acreditar con dichos documentos, salvo disposición en contrario**, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 36 fracciones III, V y VI segundo párrafo, 48 y 56 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, con relación al artículo 348 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de aplicación supletoria.

Finalmente, se determinó que en razón de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, y que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan alegatos, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se tumarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

### **C O N S I D E R A N D O S**

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 3, 4, 5 y 10, y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado





**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

**EXPEDIENTE: 2124/2024  
TERCERA SALA UNITARIA**

de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con las documentales que obran agregadas a fojas 11, 12 y 13, a la que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48, 57 y 58<sup>1</sup> de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 399<sup>2</sup> y 400<sup>3</sup> del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

**"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**

*De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830).*

<sup>1</sup> Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

<sup>2</sup> Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

<sup>3</sup> Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.



IV. Antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudian las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades demandadas:

La Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal, señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 29, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, toda vez que es improcedente respecto de la impugnación de la prescripción del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del ejercicio fiscal, por surtirse en la especie, la causal de improcedencia y sobreseimiento antes mencionada.

Tomando en consideración que la causal de improcedencia que se ha relatado tiene como finalidad controvertir el fondo del juicio al estar estrechamente vinculado su planteamiento con la procedencia o improcedencia de la nulidad solicitada, se **desestima**, ya que los argumentos esgrimidos se abordarán en lo sucesivo en esta sentencia, situación que encuentra sustentada con la siguiente tesis de Jurisprudencia bajo el rubro siguiente:

**"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.** En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas. Novena Época. Número de registro 193266 Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X. septiembre de 1999. Página: 710.

Por otra parte, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 29 fracción IX, en relación con los diversos 30 fracción I y 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en cuanto a la improcedencia del juicio de nulidad cuando se interpone en contra de disposiciones normativas de carácter general, pues en el caso se impugna la Ley de ingresos para los ejercicios fiscales 2015 dos mil quince a 2023 dos mil veintitrés.

Es infundada la improcedencia aludida y por tanto **se desestima**, ya que en el caso el actor expone argumentos tendientes a determinar la legalidad de los actos impugnados, consistentes en la existencia de una obligación fiscal a su cargo, ello en términos del artículo 4 fracción I, inciso f) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo que no constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable en cuanto al Juicio de Nulidad planteado.





V. Con fundamento en lo establecido por el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para efectos de dilucidar la presente controversia, se abordará el estudio de los conceptos de nulidad de acuerdo a la naturaleza de cada acto impugnado, siendo aplicable al caso la Jurisprudencia correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, Página: 2203, registro electrónico 2024109, que refiere:

**JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO, LOS TRIBUNALES LOCALES ESTÁN OBLIGADOS A ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ADOLEZCA DE REQUISITOS FORMALES.** Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias sobre la interpretación del artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esto es, si el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad tiene o no la obligación de analizar de manera preferente los conceptos de anulación vinculados con el fondo del asunto, cuando de manera prioritaria se hubiese declarado fundado un motivo de disenso de forma (indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto). Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que en atención a los principios de mayor beneficio y de justicia completa, por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco debe y tiene la obligación de decidir sobre los conceptos de anulación de fondo, con independencia de que el acto impugnado carezca de la debida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. Justificación: De la interpretación armónica y funcional de los artículos 1, primer párrafo, y 72 a 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se obtienen las siguientes premisas: El Tribunal de Justicia Administrativa estatal debe resolver los conflictos que se suscitan entre la administración pública y los particulares; se fijan los requisitos que debe contener la sentencia (fijación clara de la litis, fundamentos jurídicos, puntos resolutivos y los términos del cumplimiento); no obstante, los formalismos judiciales constituyen un obstáculo para la resolución de los asuntos; de igual manera, las causas de nulidad comprenden tanto aspectos de fondo como de forma. Luego, derivado del análisis del anterior segmento normativo, a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pueden extraer diversos principios, a saber: congruencia, exhaustividad, justicia completa y mayor beneficio, pro fondo, entre otros. En ese contexto, por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa local debe identificar todos los argumentos en que descansa la pretensión anulatoria de la parte actora, sobre todo aquellos donde se hacen valer argumentos orientados a obtener la insubsistencia total del acto impugnado; es decir, argumentos encaminados a obtener el mayor beneficio, cuyo objetivo es restituir al



*particular en el goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes del acto o resolución impugnados.*

**VI.** Se procede al análisis del séptimo concepto de impugnación, en el que de forma esencial refiere, que el cobro del derecho de refrendo anual de placas de circulación y holograma de los ejercicios fiscales **2020 dos mil veinte a 2023 dos mil veintitrés**, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad al establecer un trato diferenciado según el vehículo por la prestación del mismo servicio, respectivamente.

Por otro lado, expone como cuestión previa, que, en el presente caso, no existe violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los Ejercicios Fiscales 2020, 2021, 2022 y 2023, fueron reformadas, siendo evidente, que los servicios por los cuales el Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco, presta por concepto de derechos que se prevén en las fracciones III, Inciso a), y III BIS, del artículo 23 de las citadas Leyes, son **DISTINTOS**, puesto que para el ejercicio fiscal 2020, en la primera de las fracciones e inciso se cobra la tarifa señalada por concepto de Refrendo Anual y Calcomanía de Identificación Vehicular, mientras que en la fracción III BIS, se excluye a las del Refrendo Vehicular el cobro de Calcomanía de Identificación: por su parte, para el ejercicio fiscal de 2021 en la primera de las fracciones e inciso, se cobra la tarifa ahí señalada por concepto de Refrendo anual y tarjeta de circulación de PVC con código de seguridad QR, mientras que en la fracción III Bis, descrita en segundo orden por refrendo anual y Tarjeta de Circulación en papel: situación que claramente evidencia, no se trata de una misma prestación de servicio, y por ende, no se cobra un tarifa igual.

Ahora bien, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, al resolver la contradicción de criterios 47/2023, entre los sustentados por el Primer, el Segundo, el Tercer, el Cuarto, el Quinto, el Sexto y el Séptimo Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, estableció que el artículo 23 fracciones III, inciso A) y III Bis, por los ejercicios fiscales 2020 dos mil veinte, 2021 dos mil veintiuno, y 2022 dos mil veintidós, no transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, dando origen a la siguiente jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Undécima Época, Tesis: PR.A.CS. J/28 A (11a.), y registro digital: 2027628:

**DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. EL ARTÍCULO 23, FRACCIONES III, INCISO A), Y III BIS, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, QUE ESTABLECE UNA TASA DIFERENCIADA, NO**





Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE: 2124/2024  
TERCERA SALA UNITARIA

**TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.** Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias al analizar si el artículo 23, fracciones III, inciso a), y III Bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, que establece distintas cuotas para el pago de derechos de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular, para automóviles y motocicletas, viola o no los principios tributarios de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que el artículo 23, fracciones III, inciso a), y III Bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, no vulnera los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Justificación: El citado precepto establece que por los servicios de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular, el derecho se causará de acuerdo con una tarifa diferenciada, en razón de que a los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, impone una tarifa de \$649.00 (seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y por el refrendo anual de motocicletas, la tarifa de \$260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque existe un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debido a que la actividad administrativa que para el Estado de Jalisco representa fabricar las calcomanías de identificación vehicular acorde a los estándares técnicos y de calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que entrega a los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, implica un costo mayor que el que representa para brindar el servicio a los usuarios de motocicletas a quienes no proporciona dicha calcomanía; por tanto, también respeta el principio de equidad tributaria, porque la tasa diferenciada en la cuota que se cobra para la prestación de ese servicio no produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sino que atiende a una justificación objetiva y razonable, conforme al despliegue técnico que realiza el Estado.

Así como la correspondiente a la Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tesis: PR.A.CS. J/29 A (11a.) y registro digital 2027629, que dice:

**DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE PVC CON CÓDIGO DE SEGURIDAD QR. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES III, INCISO A), Y III BIS, DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022, QUE ESTABLECEN UNA TASA DIFERENCIADA, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.** Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias al analizar si los artículos 23, fracciones III, inciso a), y III Bis, de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, que establecen distintas cuotas para el pago de derechos de refrendo anual vehicular y tarjeta de circulación de PVC con código de seguridad QR, para automóviles y motocicletas, violan o no los principios tributarios de equidad y proporcionalidad consagrados



*en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que los artículos 23, fracciones III, inciso a), y III Bis, de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, no vulneran los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Justificación: Los citados artículos, al establecer que por los servicios de refrendo anual vehicular, el derecho se causará de acuerdo con una tarifa diferenciada, en razón de que a los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, imponen una tarifa de \$688.00 (seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y \$711.00 (setecientos once pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente; y por el refrendo anual de motocicletas, \$276.00 (doscientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) y \$285.00 (doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente; no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque existe un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debido a que la actividad administrativa que para el Estado de Jalisco representa adquirir las tarjetas de circulación en PVC con código de seguridad QR, las cuales deben contar con mayores medidas de seguridad acordes con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que entrega a los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, implica un costo mayor que el que representa para brindar el servicio a los usuarios de motocicletas a quienes proporciona dicho documento en papel; por tanto, también respeta el principio de equidad tributaria debido a que la tasa diferenciada en la cuota que se cobra para la prestación de ese servicio no produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sino que atiende a una justificación objetiva y razonable, conforme al despliegue técnico que realiza el Estado.*

Toda vez que la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, por el ejercicio fiscal 2023 dos mil veintitrés, guarda identidad esencial existente entre el texto anterior y el texto posterior, deberá reconocerse la validez del pago de derechos por el servicio de refrendo anual de registro y holograma vehicular, para los ejercicios fiscales 2020 dos mil veinte al 2023 dos mil veintitrés, por concepto de pago de derechos por refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma vehiculares.

Por consiguiente, se **reconoce la validez** respecto al pago de derechos por el servicio de refrendo anual de registro y holograma vehicular, para los ejercicios fiscales 2020 dos mil veinte al 2023 dos mil veintitrés, por actualizarse la hipótesis prevista en los párrafos que anteceden.

VII. Por otra parte, se considera que le asiste la razón al accionante, cuando refiere que las multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución derivados del cobro de refrendo de los ejercicios fiscales 2020 dos mil veinte a 2023 dos mil veintitrés, violentan las formalidades esenciales del procedimiento, así como las garantías de seguridad y de audiencia y defensa, ya que no le fueron debidamente notificadas dichas imposiciones, no obstante que





**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

**EXPEDIENTE: 2124/2024  
TERCERA SALA UNITARIA**

la autoridad demandada –Secretaría de la Hacienda Pública-, se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 94<sup>4</sup> del Código Fiscal del Estado de Jalisco, que establece que los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos, así como acuerdos o resoluciones administrativas que puedan ser recurridos **se harán personalmente**, notificaciones que deben efectuarse siguiendo las formalidades que establece el artículo 96 del citado Ordenamiento Legal que dispone:

**"Artículo 96.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio de la persona, a quien se deba notificar, y que haya señalado ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, se estará a las reglas del artículo 47 de este código. Dichas notificaciones podrán practicarse en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes deba notificarse se presentan, por cualquier circunstancia en ellas, o en el lugar en que se encuentren, previa identificación.**

**Se entenderán con la persona que debe ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador, cerciorado de que sea el domicilio fiscal, dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que se le espere, a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más próximo.**

**Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, cerciorado nuevamente el notificador de lo establecido en el párrafo anterior y de negarse éste a recibirla se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio.**

**En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación.**

**De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador levantará acta circunstanciada por escrito.**

**Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán gastos de ejecución, a cargo de quien incurrió en el incumplimiento de la obligación."**

De lo anterior se colige que las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal y a falta de este, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se realizará con cualquiera que se encuentre en el domicilio, de negarse a recibirla se realizará por instructivo que se fije en la puerta del domicilio,

<sup>4</sup> Artículo 94.- Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos o resoluciones administrativas que puedan ser recurridas, se harán personalmente. Se notificará por edictos, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien se deba notificar, o ésta se encuentre fuera del Estado, sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales locales. Se notificará por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no se encuentre después de iniciadas las facultades de comprobación o se oponga a la diligencia de notificación y en los demás casos que señalan las leyes fiscales y este Código.



además de que de toda diligencia de notificación se deberá levantar acta circunstanciada por escrito.

No obstante lo anterior, la parte actora en su escrito inicial de demanda estableció de manera puntual que nunca se le notificó dicho acto, aunado a que dicha circunstancia no se encuentre satisfecha, ni tampoco fue desvirtuada por la autoridad demandada -Secretaría de la Hacienda Pública-, ya que no acredita que se haya efectuado la notificación cumpliendo con los requisitos establecidos en los citados artículos 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, quedando de manifiesto para esta Autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia declarar la nulidad de las multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución derivados del cobro de refrendo de los ejercicios fiscales 2020 dos mil veinte a 2023 dos mil veintitrés, sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

**"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.** La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Así entonces, aun cuando se trata de una omisión formal, debe declararse la nulidad lisa y llana, en virtud de que la ausencia de notificar personalmente al actor, no es sujeta de redimirse, ya que los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos impugnados ocurrieron en forma accidental con anterioridad, de manera que no pueden reincorporarse a la actualidad y por tanto, tampoco pueden servir de base para imponer nuevamente la sanción, dada la imposibilidad física y material de repetir esos sucesos y notificarlos de manera personal al infractor.

VIII. Finalmente, le asiste la razón a la parte demandante en el tercer concepto





**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

**EXPEDIENTE: 2124/2024  
TERCERA SALA UNITARIA**

de impugnación, en el sentido de que en la especie se actualiza la **prescripción**, respecto del **refrendo anual** de placas vehiculares de los ejercicios fiscales **2015 dos mil quince al 2019 dos mil diecinueve**, al haber transcurrido en exceso el término previsto en el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

Al manifestarse a lo anterior, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal, quien compareció en representación y sustitución la autoridad demandada -Secretaría de la Hacienda Pública y/o Servicio Estatal Tributario-, señala que son inoperantes los conceptos de impugnación de la actora formulados sobre la prescripción de los créditos fiscales originados por el concepto de refrendo de los ejercicios fiscales del 2015 al 2019, toda vez que el actor dentro del presente juicio no ha justificado haber solicitado petición alguna ante esta Secretaría, en el sentido de que fuera declarada de la prescripción que hoy alega.

Ello es así ya que para que se actualice esta figura jurídica es necesaria la concurrencia de varios supuestos, a saber: 1) La existencia de una obligación de pago por parte del sujeto pasivo, 2), Que haya transcurrido un periodo de cinco años desde la fecha en que fue exigible el cobro de la obligación y 3) Que no haya existido gestión de cobro durante el periodo aludido.

En ese orden de ideas, es preciso señalar el contenido de los artículos 90, 91 y 94 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, establece lo siguiente:

**"Artículo 90.- Las obligaciones ante la Hacienda del Estado y los créditos a favor de éste, por impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, se extinguen por prescripción en el término de cinco años. En el mismo plazo se extingue también por prescripción, la obligación del fisco del Estado de devolver las cantidades pagadas indebidamente. La prescripción del crédito principal extingue simultáneamente los recargos, sanciones y gastos de ejecución. La prescripción se inicia a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos y será reconocida o declarada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a petición de cualquier interesado".**

**"Artículo 91. La prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro notificada en los términos del artículo 94 de este Código, por el reconocimiento expreso o tácito del deudor, respecto de la existencia de la obligación de que se trate. De los requisitos señalados en este artículo deberá existir constancia por escrito".**

**"Artículo 94. Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos o resoluciones administrativas que puedan ser recurridas, se harán personalmente.**

**Se notificará por edictos, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien se deba notificar, o ésta se encuentre fuera del Estado, sin haber**



*dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales locales.*

*Se notificará por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no se encuentre después de iniciadas las facultades de comprobación o se oponga a la diligencia de notificación y en los demás casos que señalan las leyes fiscales y este Código."*

De los preceptos legales transcritos, se advierte, sustancialmente, que las contribuciones a favor del fisco, se extinguen por prescripción, en el término de cinco años, misma que se inicia, a partir de la fecha en que pudieron ser legalmente exigidos; asimismo, que ésta se interrumpe con cada gestión de cobro notificada, sin que en la especie la autoridad demandada haya acreditado la existencia de gestiones de cobro debidamente notificadas a la parte actora, con las cuales se acredite la interrupción del término legal para que opere la prescripción; de ahí que se presuma que no se hayan practicado atendiendo a las formalidades señaladas en los artículos 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

Por lo anterior, se estima que le asiste la razón a la parte actora respecto a la prescripción aducida, toda vez que las autoridades demandadas no acreditaron haber notificado de manera personal al actor requerimiento de cobro alguno con el cual se interrumpa el término para que opere la prescripción solicitada por el demandante.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, bajo la tesis 2a./J. 150/2011, visible en la página 1412, que señala:

**"PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A QUE SE CONSUMÓ EL PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUÉLLA NO LO INTERRUMPE.** De la interpretación del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación se colige que basta con que haya transcurrido el plazo de 5 años para que se actualice la prescripción del crédito fiscal, aun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de ejecución realizado por la autoridad con posterioridad a que se consumó dicho plazo, es decir, el acto de cobro posterior no puede interrumpir un lapso extinguido, ni implica respecto al nuevo acto una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado. Lo anterior es así, porque la prescripción constituye una sanción contra la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad económico coactiva, de modo que una vez fenecido el plazo para que opere, el contribuyente puede hacerla valer, vía acción ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o vía excepción cuando se pretenda cobrar, a través de los medios de defensa correspondientes, aun cuando la autoridad con posterioridad a la consumación de dicho plazo haya realizado un acto de cobro y éste no lo haya impugnado el deudor, ya que la prescripción no está condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad a la consumación del plazo referido; sostener lo contrario, provocaría que fuera letra muerta el citado artículo 146, pues la autoridad





**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

**EXPEDIENTE: 2124/2024  
TERCERA SALA UNITARIA**

*indefinidamente llevarla a cabo actos de cobro, sin importar que hubiera operado la prescripción, lo cual es inadmisibles, dado que atentaría contra los principios de seguridad y certeza jurídica que inspiraron al legislador al establecer la institución de la prescripción." (Época: Novena Época. Registro: 161028. Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Tesis: 2ª/JJ.150/2011.*

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

### **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** La parte actora **RAFAEL DE LA CRUZ BUENROSTRO**, en el presente juicio, **desvirtuó parcialmente** la legalidad de los actos administrativos impugnados.

**SEGUNDO.** Se reconoce la validez de la determinación por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, para los ejercicios fiscales del año 2020 dos mil veinte a 2023 dos mil veintitrés, por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando del cuerpo de la presente resolución.

**TERCERO.** Se declara la nulidad de las multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución derivados del cobro de refrendo de los ejercicios fiscales 2020 dos mil veinte a 2023 dos mil veintitrés, actos que recaen sobre el automotor con placas de circulación **JBV3542**, por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando del cuerpo de la presente resolución.

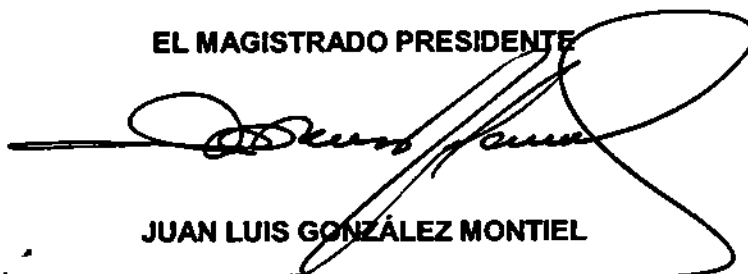
**CUARTO.** Se actualiza la prescripción del cobro de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dos mil quince al 2019 dos mil diecinueve, así como los accesorios generados por los motivos expuestos en el último considerando del cuerpo de la presente resolución.



**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.**

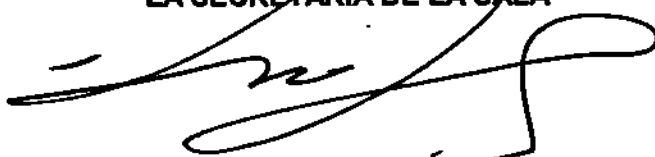
Así lo resolvió el Magistrado JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la presencia de la Secretaria de Sala NOHEMI TORRES SAAVEDRA, quien autoriza y da fe.

**EL MAGISTRADO PRESIDENTE**



**JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL**

**LA SECRETARIA DE LA SALA**



**NOHEMI TORRES SAAVEDRA**

JLGM/NTS/EFH





Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

43  
EXPEDIENTE: 2124/2024  
TERCERA SALA UNITARIA

Guadalajara, Jalisco; 21 veintiuno de agosto de 2024 dos mil veinticuatro.

Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace constar que la sentencia definitiva dictada en autos, **HA CAUSADO ESTADO**, toda vez que ninguna de las partes interpuso algún medio de defensa en su contra, atento a lo establecido por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, con relación a lo dispuesto por el artículo 96, fracción I del ordenamiento legal invocado, y al artículo 17 diecisiete de la Ley de Amparo.

Por tanto, y en atención a lo establecido por los artículos 76 y 85 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, de oficio se concede a las autoridades demandadas **-Servicio Estatal Tributario y/o Secretaría de la Hacienda Pública-** el término de **15 quince días**, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que acrediten que se retiraron de la vida jurídica los actos administrativos impugnados, al haberse declarado su nulidad, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le aplicará cualquiera de las medidas de apremio previstas por el artículo 10 del ordenamiento legal invocado.

**NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS PARTES.**

Así lo acordó el Magistrado JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la presencia del Secretario de Sala RIGOBERTO ISAIÁS MARTÍNEZ PÉREZ, quien autoriza y da fe.

RGMRIMP/jedo.

Tribunal de Justicia Administrativa